

Bogotá D.C, 29 de abril de 2024

NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 56932. RESOLUCIÓN No. 41469 24

Señor (a)
BUSES AMARILLOS Y ROJOS SA
CC 8600024342
AV CARACAS 15 47 SUR

EXPEDIENTE:	2139 23
RESOLUCIÓN No.	41469 24
FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/02/2024

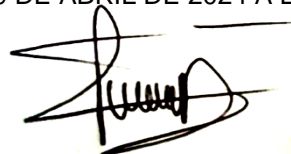
Teniendo en cuenta que, ante el desconocimiento de la información del domicilio o residencia del investigado no fue posible notificar la **RESOLUCIÓN N° 41469 24 DE 21/02/2024** del expediente **No. 2139 23** expedida por la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público, en los términos de los Artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el despacho procede a realizar la **notificación por aviso** por medio de la presente publicación por un término de cinco (5) días hábiles contados a partir del **29 de abril de 2024** en la página web www.movilidadbogota.gov.co /subdirección de control e investigaciones al transporte público (link) y en el Módulo No. 17, ubicado en la Carrera 28A N° 17A-20 PALOQUEMAO, Piso 1º., de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la citada Ley.

Se advierte a la investigada que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso.

Se adjunta a este aviso en CUATRO (4) folios copia íntegra la Resolución 41469 24 DE 21/02/2024 del expediente No. 2139 23.

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE FIJA HOY 29 DE ABRIL DE 2024 A LAS 7:00 A.M.
POR EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES.

FIRMA RESPONSABLE FIJACIÓN:



JUAN CARLOS GALVIS MUÑOZ

CERTIFICO QUE EL PRESENTE AVISO SE DESFIJA HOY 06 DE MAYO DE 2024 A LAS 4:30 P.M

FIRMA RESPONSABLE DESFIJACIÓN:



JUAN CARLOS GALVIS MUÑOZ

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EXPEDIENTE: 2139-23

RESOLUCIÓN No. ~~41459-23~~ **41469-24**

“POR LA CUAL SE CIERRA LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA ADELANTADA EN CONTRA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2.”

LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL E INVESTIGACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, en ejercicio de las facultades legales y en especial, las que le confieren las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1437 de 2011, el Decreto 1079 de 26 de mayo de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, y el numeral tercero (3) del artículo treinta y uno (31) del Decreto Distrital 672 del 22 de noviembre de 2018, procede a fallar la presente investigación con fundamento en los siguientes:

1. ANTECEDENTES

La Subdirección de Investigaciones de Transporte Público, mediante **Resolución No. 29121-23 de fecha 19 de abril de 2023**, ordenó la apertura de investigación administrativa en contra de la empresa de transporte **BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2**, en la cual se realizó la imputación de dos cargos: el primer cargo, por presuntamente transgredir lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 336 de 1996, al no contar con el seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, el segundo cargo, por presuntamente incurrir en la conducta señalada en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, al no suministrar la información solicitada con ocasión de la verificación de los protocolos de bioseguridad. (Folios 18-20). Lo anterior de conformidad con el memorando **SCITP-20214220259133 del 23 de noviembre de 2021**, como consecuencia de los resultados obtenidos en la revisión integral 2021 –Requisitos de vehículos y conductores. (Folio 1-17).

Acto administrativo notificado a la empresa, el 21 de junio de 2023, mediante aviso No. 42184, contenido en el oficio No. SCITP-202342205276811 del 15 de junio de 2023, recibido por la empresa el 20 de junio de la misma anualidad. (Folio 22)

La empresa investigada presentó escrito de descargos y solicitud probatoria, mediante radicado No. 202361202895522 del 04 de julio de 2023. (Folios 23-29)

Mediante Auto No. 11467-23 del 28 de noviembre de 2023, la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público, ordenó correr traslado para que la empresa investigada, presentara sus alegatos de conclusión. (Folios 30-31)

Dicho acto administrativo se comunicó a la empresa investigada el 06 de diciembre de 2023, mediante oficio SCITP No.202342217985161 del 05 de diciembre de 2023.

La empresa investigada, no presentó escrito de alegatos de conclusión.

2. FUNDAMENTOS LEGALES

La prestación eficiente y de modo seguro del servicio público de transporte, obedece al desarrollo de los mandatos de la Constitución Nacional, en especial a lo que refiere al artículo segundo que trata de los fines del Estado, como lo es servir a la comunidad y en sentido más amplio lo establecido en el artículo 365 así:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen que fijen la ley (...) en todo caso el estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (...).”

Dentro de los principios rectores del transporte consagrados en la Ley 105 de 1993, corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación, la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas.

Adicionalmente, la Ley 336 de 1996 o Estatuto Nacional del Transporte contempla en el artículo 3º, que las autoridades competentes para la regulación del transporte público:

"(...) exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio (...).

En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los Artículos 333 y 334 de la Constitución Política".

El artículo 6º de la Ley 336 de 1996, define actividad transportadora como:

"Conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional".

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 29 preceptúa:

"ARTICULO 29. *El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".

Según el inciso 2º del artículo 1º de la Ley 105 de 1993, conforman el Sistema Nacional de Transporte, los organismos de tránsito y transporte de las entidades territoriales.

De conformidad con el artículo 8 de la Ley 336 de 1996, las autoridades que conforman el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción.

Conforme a lo previsto en el artículo 2 numeral 2 del Decreto 672 de 2018, la Secretaría Distrital de Movilidad es autoridad de tránsito y transporte en el Distrito Capital.

Acorde con lo establecido en el artículo 31 numeral 3 del Decreto 672 de 2018, la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público tiene como función, adelantar en primera instancia los procesos administrativos por violación a las normas de transporte público.

Adicionalmente, la Ley 1437 de 2011, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contempla:

"ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS. *Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los*

principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. (...)

1. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. (...)

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. (...)

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa (...)."

"Artículo 43. Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directamente o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar con la actuación" (Subrayado ajeno al texto).

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Atendiendo a los hechos anteriormente descritos; a las disposiciones normativas precitadas que constituyen el sustento jurídico de la presente investigación, procede el despacho a pronunciarse respecto de la actuación administrativa adelantada, con el procedimiento señalado en los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, dando aplicación a los principios orientadores de las actuaciones administrativas, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, de la siguiente manera:

Mediante **Resolución No. 29121-23 de fecha 19 de abril de 2023**, esta Subdirección ordenó la apertura de investigación administrativa en contra de la empresa de transporte **BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2**, en la cual se realizó la imputación de dos cargos: **el primer cargo**, por presuntamente transgredir lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 336 de 1996, al no contar con el seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, **el segundo cargo**, por presuntamente incurrir en la conducta señalada en el literal c) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, al no suministrar la información solicitada con ocasión de la verificación de los protocolos de bioseguridad.

Sin embargo, el despacho constató, que, a la empresa acá investigada le fue revocada la habilitación para operar, el día 24 de marzo de 2022 mediante **"RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO DISTRITAL DE PASAJEROS, OTROGADA A LA EMPRESA TRANSPORTE BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2"**, por lo que a la fecha dicha sociedad, no cuenta con ningún tipo de documento y/o permiso legal, comercial, y de habilitación, para continuar con la presente investigación.

Conforme a lo anterior se incorpora al expediente el documento "RESOLUCIÓN NÚMERO 108007 DE 2022" mediante el cual se declara la fuerza de ejecutoria de la habilitación para la prestación del servicio de la empresa de transporte **BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A.**, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2. (Folios 33-37).



RESOLUCIÓN NÚMERO 108007 DE 2022

"RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO DISTRITAL DE PASAJEROS, OTORGADA A LA EMPRESA BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A., IDENTIFICADA CON NIT 860002434-2"

EL(LA) SUBSECRETARIA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD- SDM, en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 105 de 1993, los artículos 5 y 6 de la Ley 336 de 1996, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, artículos 2.2.1.1.3 y 2.2.1.1.3.1 del Decreto Único reglamentario del Sector Transporte 1079 de 2015, el Decreto Distrital 672 de 2018, la Resolución 084 de 2019 de la Secretaría Distrital de Movilidad, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia consagra que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y en concordancia con éste el artículo 5° de la Ley 336 de 1996, establece la necesidad de garantizar la prestación del servicio de transporte, el cual es considerado esencial.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: - DECLARAR LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA RESOLUCIÓN No. 119 DEL 18 DE ABRIL DE 2002, por la cual se concedió habilitación para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo a la empresa BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A., identificada con NIT.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co



RESOLUCIÓN NÚMERO 108007 DE 2022

"RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LA HABILITACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR COLECTIVO DISTRITAL DE PASAJEROS, OTORGADA A LA EMPRESA BUSES AMARILLOS Y ROJO S.A., IDENTIFICADA CON NIT 860002434-2"

(...)

En consecuencia, se evidencia que, al momento de la formulación de cargos mediante la Resolución de Apertura No. 29121-23 de fecha 19 de abril de 2023, la cual fue notificada a la empresa **BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A.**, identificada con NIT. 800.089.388-7 el día 21 de junio de 2023, la empresa investigada ya no contaba con la respectiva habilitación.

Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



Es por ello, que resulta necesario acudir a lo dispuesto en la Jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-713-12 del 12 de diciembre de 2012, que advirtió la protección al derecho al debido proceso y legalidad en las actuaciones administrativas, de la siguiente manera:

“DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Definición

La jurisprudencia de esta Corte ha definido el debido proceso administrativo como: “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”. Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”¹.

Ante la virtud jurisprudencial, se comprende que el debido proceso en materia administrativa se encuentra en su validez en el hecho que garantice un conjunto de los derechos que la asisten al administrativo, por lo anterior, ya que resulta primordial y de suma importancia establecer la conducta a investigar, esta no puede ser imprecisa no superflua en los Acto Administrativos proferidos dentro de las investigaciones, pues de esta forma se conlleva a una investigación pertinente y con requisitos cumplidos y se realice posterior a la defensa, al igual que las pruebas que sustenta la conducta investigada y de las cuales entrarán a desvirtuar según sea el caso, y cumplir con los parámetros jurisdiccionales de una controversia sana.

Como bien la norma lo expone, el debido proceso es “la constitución de conjunto de garantías destinadas a la protección del ciudadano vinculado o eventualmente sujeto a una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten las formalidades propias de cada juicio”²; con el fin de perseverar los derechos de quienes se encuentran incurso en una relación jurídica, o casos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o una obligación a la imposición de una sanción.

Se determina, que, es una aplicación inmediata que faculta a toda persona que EXIGIR, un proceso con reconocimiento de las garantías sustanciales y procesales, desarrollando ante una autoridad competente que actué con independencia e imparcialidad; del mismo modo se encuentra inmerso en el artículo 29 de la nuestra Carta Política/ 91, y norma aplicable la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en el artículo 3º, que trata de los principios de las actuaciones administrativas que se han aplicativo y mencionado anteriormente, en su numeral primero.

En la Sentencia C-980 de 2010 de la Corte Constitucional con Magistrado Ponente Doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, se determinaron las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, las cuales son:

“(i) Ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso.” (Resalta y subraya fuera del texto legal).

¹ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-010 de 2017 Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá D.C., veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017).

² Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C- 163/19.



En ese sentido para la autoridad, como rectora del debido proceso administrativo, el mismo implica una limitación al ejercicio de sus funciones, imponiendo así una validez de criterio objetivo y evitando la negligencia en la actuación.

Así las cosas, una de las garantías del derecho al debido proceso, es el derecho a la prueba y al debido proceso probatorio como lo indica la corte constitucional en la sentencia C-496 de 2015, magistrado ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB:

“El derecho a la prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia y el más importante vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial. En este sentido, según el artículo 29 de la Constitución, la persona que sea sindicada tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, de esa norma -que responde a un principio universal de justicia- surge con nitidez el derecho, también garantizado constitucionalmente, a controvertir las pruebas que se alleguen en contra del procesado y a presentar y solicitar aquellas que se opongan a las pretensiones de quienes buscan desvirtuar la presunción de su inocencia”.

En ejercicio de la acción pública, la Sala acotó con su posición que la incorporar en forma indebida las formalidades de unas pruebas dentro de las investigaciones, se da el paso al incurrir la violación al acceso a la justicia y adicionalmente a la defensa por parte del administrado, lo que conlleva, a que este despacho estará incurriendo en varias vías de hecho, y seguir una actuación procesal sin cumplir con este punto de importancia, así lo relaciona la Corte Constitucional en:³

“Sentencia C-496 de 2015.- Los defectos del análisis probatorio, la ausencia total del mismo y la falta de relación entre lo probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible el debido proceso y constituyen irregularidades de tal magnitud que representan vías de hecho.

En este sentido, las anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima el derecho a la prueba, constituyen un defecto fáctico que, al vulnerar derechos fundamentales, pueden contrarrestarse a través de la acción de tutela. Se parte de la base de que el juez es libre para apreciar y otorgar un valor a las pruebas que obran dentro del proceso, pero es claro también que por vía de tutela se puede reparar -ante situaciones abiertamente contrarias a las reglas constitucionales, al debido proceso y a la ley- la lesión sufrida por la parte afectada que carece de otro medio de defensa judicial o que afronta la inminencia de un perjuicio irremediable.”

En consecuencia, se sostuvo que el problema jurídico consistía en determinar si una norma, conforme con la cual, “es la omisión o en su defecto una indebida incorporación de prueba”, que resulta necesario para en análisis sustancial de un fondo sancionatorio que es <<previo para el dictamen de la apertura de investigación y continuar con las etapas procesales>>, impide que se llegue a realizar un fallo de la norma supuestamente vulnerada, y por ende, resulta peor como violatoria del debido proceso, y los derechos de defensa y acceso a la justicia, y más cuando dicha empresa no tiene requisitos de habilitación para operar desde el año 2022.

Entonces, se considera, que, continuar con la presente investigación se tornaría innecesario, pues claramente la empresa investigada no podría cumplir las obligaciones de eventual pronunciamiento desfavorable a sus intereses.

Así las cosas, de cara a la expedición del acto administrativo, este aspecto se constituye en motivo suficiente para que este operador jurídico bajo la facultad de revisar sus actuaciones, y de conformidad a la observancia plena de los principios constitucionales que rigen toda actuación administrativa (eficacia, economía, celeridad), proceda a ordenar el cierre de la presente investigación junto con los cargos endilgados, y consecuentemente el archivo definitivo de las presentes diligencias, al encontrarse liquidada y cancelada la matrícula mercantil y Resolución de Revocatoria de habilitación.

³ Corte Constitucional en Sentencia C- 496 de 2015.- incorporación de pruebas al debido proceso, para da paso al análisis sustancial, sin ser una prueba irregular por no su incorporación.

De conformidad con las consideraciones precedentes y en aras de garantizar el debido proceso, procede este Despacho a ordenar el **CIERRE** de la investigación administrativa iniciada en contra de **LA EMPRESA DE TRANSPORTE BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2** y, en consecuencia, a archivar definitivamente la misma.

En mérito de lo anteriormente expuesto la **SUBDIRECCIÓN DE CONTROL E INVESTIGACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CERRAR la investigación administrativa adelantada en contra de **LA EMPRESA DE TRANSPORTE BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2**, iniciada mediante **Resolución No. 29121-23 de fecha 19 de abril de 2023**, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

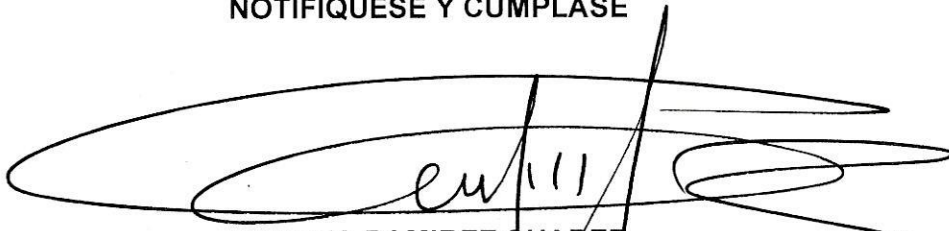
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, ordénese el **ARCHIVO** definitivo de las presentes diligencias adelantadas bajo el expediente No. **2139-23**, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente Resolución, a **LA EMPRESA DE TRANSPORTE BUSES AMARILLOS Y ROJOS S.A, IDENTIFICADA CON NIT. 860.002.434-2**, por medio de su Representante legal o a quien haga sus veces, en la dirección de notificaciones judiciales que reposa en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., a través de la Secretaría de la Subdirección de Control e Investigaciones al Transporte Público, en la forma y en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). La constancia de la notificación deberá formar parte del respectivo expediente.



ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la **SUBDIRECCIÓN DE CONTROL E INVESTIGACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO** y/o el de apelación ante la **DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS AL TRÁNSITO Y TRANSPORTE** de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, de los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con los términos establecidos en el artículo 74 y s.s., de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme el presente acto administrativo, archívese de manera definitiva el expediente.

Dada en Bogotá D. C., a los **21 FEB 2024**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDREA RAMIREZ SUAREZ
Subdirectora de Control e Investigaciones al Transporte Público
Secretaría Distrital de Movilidad

Proyectó: Luz Mery Paternina Medina 
Revisó y Aprobó: Alejandra Ramirez Camargo 
Exp. 2139-2023